

REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

22ª REUNIÓN — 13ª SESIÓN ORDINARIA — 26 DE AGOSTO DE 1992

Presidencia del señor vicepresidente del Honorable Senado,

don ORALDO N. BRITOS,

y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,

doctor LUIS AGUSTÍN LEÓN

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P. V. MURGUÍA

Prosecretarios: señores JUAN JOSÉ CANALS y DONALDO ANTONIO DIB

FUNCIONARIOS INVITADOS:

- Señor ministro de Justicia de la Nación, doctor León C. Arslantán.
- Señor secretario de Justicia de la Nación, doctor Daniel Castruccio.
- Señor asesor de Gabinete del ministro, doctor Roberto V. Vásquez.

LEGISLADORAS EXTRANJERAS INVITADAS:

- Señoras diputadas Isolda Heredia de Salvatierra y Ana Lucina Gareña Maldonado.

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AMOEDO, Julio A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
COSTANZO, Remo J.
FIGUEROA, José O.
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GURDULICH de CORREA, Lilianna I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
JUÁREZ, Carlos A.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César

MALHARRO de TORRES, Margarita
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MAZZUCCO, Faustino M.
MOLINA, Pedro E.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
OYARZÚN, Juan C.
POSLEMAN, Eduardo A.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAADI de DENTONE, Alicia A.
SAMUDIO CODOY, Wilfrido
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Conrado H.
TRILLA, Juan
VACA, Eduardo P.
VELÁZQUEZ, Héctor J.

A CARGO DEL PODER EJECUTIVO:

MENEM, Eduardo

AUSENTES CON AVISO:

BRAVO HERRERA, Horacio F.
CENDOYA, Jorge J.
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO, Juan Carlos

EN COMISION:

MARTÍNEZ, Daniel E.

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 2106.)
2. Por invitación del señor presidente del Honorable Senado, el señor senador por Santa Cruz Pedro E. Molina procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 2107.)
3. Asuntos entrados:
 - I. Comunicaciones de la Presidencia. (Pág. 2107.)
 - II. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueban anexos del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduana, adoptado en México en 1981. (P.E.-240/92.) (Pág. 2107.)
 - III. Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 2116.)
 - IV. Proyecto de ley en revisión por el que se ratifica el "Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales". (C.D.-43/92.) Moción del señor senador Vaca para considerarlo con preferencia en la primera sesión de la semana próxima, con despacho de comisión o sin él. Se aprueba. (Página 2116.)
 - V. Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Pág. 2119.)
 - VI. Comunicaciones oficiales. (Pág. 2120.)
 - VII. Dictámenes de comisiones. (Pág. 2120.)
 - VIII. Proyecto de declaración del señor senador Oyarzún por el que se declara de interés para el Senado de la Nación la I Fiesta Provincial y Nacional del Medio Ambiente ECO Ushuaia 92. (S.-592/92.) (Pág. 2123.)
 - IX. Proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris y otros señores senadores por el que se solicita un subsidio para el Club del Progreso, de la Capital Federal. (S.-593/92.) (Página 2124.)
 - X. Proyecto de ley del señor senador Rodríguez Saá y otros señores senadores sobre tráfico internacional de obras de arte de autores vivos. (S.-594/92.) (Pág. 2124.)
 - XI. Proyecto de comunicación del señor senador Romero Feris por el que se solicitan informes con relación a la intoxicación y muerte de personas por ingestión de propóleos. (S.-595/92.) (Pág. 2127.)
 - XII. Proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicitan informes con relación al fallecimiento de un menor de edad en la comisaría 1^a de Morón, Buenos Aires. (S.-598/92.) (Pág. 2128.)
 - XIII. Proyecto de comunicación del señor senador Solari Yrigoyen por el que se solicita se realice un nuevo llamado a licitación para la privatización parcial de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas S.A. (S.-599/92.) (Pág. 2128.)
 - XIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes con relación a la posible eliminación de subsidios a exportaciones argentinas. (S.-600/92.) (Pág. 2133.)
 - XV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la reparación del aeropuerto de Esquel, Chubut. (S.-601/92.) (Pág. 2136.)
 - XVI. Proyecto de comunicación del señor senador Figueron por el que se solicita la creación de una comisión técnica para el estudio de la situación agropecuaria en Santiago del Estero. (S.-602/92.) (Pág. 2136.)
 - XVII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita se elimine el polietileno como envoltura de cortes cárnicos. (S.-603/92.) (Página 2137.)
 - XVIII. Proyecto de ley de los señores senadores Romero y Gurdulich de Correa por el que se prorrogan los plazos establecidos en los capítulos I y VI de la ley 23.696 (Reforma del Estado). (S.-604/92.) (Pág. 2138.)
 - XIX. Proyecto de ley de la señora senadora Malharro de Torres por el que se instituye el segundo lunes de mayo como "Día Nacional del Actor". (S.-605/92.) (Pág. 2138.)
 - XX. Proyecto de ley del señor senador Trilla por el que se modifica la ley de reforma impositiva respecto del endoso de cheques. (S.-606/92.) (Página 2138.)
 - XXI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Rivas por el que se solicita se remitan las pruebas utilizadas por un fiscal de Nueva York contra el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) que responsabilizarían a ex funcionarios del Banco Central de la República Argentina. (S.-607/92.) (Pág. 2139.)
 - XXII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se solicitan informes con relación al envenenamiento por consumo de productos medicinales. (S.-608/92.) (Página 2139.)
 - XXIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se solicita el esclarecimiento de denuncias sobre el fusilamiento de soldados argentinos en la guerra de Malvinas. (S.-609/92.) (Pág. 2140.)

Romero y Vaca por el que se solicita un subsidio para el consorcio Barrio Parque Los Andes, de la Capital. (S.-35/92.) Se aprueba como proyecto de comunicación. (Pág. 2256.)

71. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación, de Cultura y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Lafferrière por el que se solicita un subsidio para la Comisión Municipal de Cultura de Rosario del Tala, Entre Ríos. (S.-74/92.) Se aprueba. (Página 2257.)
72. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Figueroa por el que se solicita un subsidio para la Biblioteca Popular "Dr. Manuel Gorostiaga", de Santiago del Estero. (S.-1434/91.) Se aprueba. (Pág. 2258.)
- (73) Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre implementación del juicio oral y de las instituciones incorporadas en las leyes 23.984 y 24.050 en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. (CD.-31/92.) Se aprueba. (Página 2259.)
74. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones, por la Cámara constituida en comisión, el proyecto de ley del que es autor junto con otros señores senadores por el que se crea un tribunal oral en lo criminal federal con asiento en Mendoza y otras dependencias. (S.-642/92.) (Pág. 2274.)
75. A moción de la señora senadora Malharro de Torres y del señor senador Posleman se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley por el que se declara el segundo lunes del mes de mayo de cada año Día Nacional del Actor. (S.-605/92.) (Pág. 2276.)
76. A moción del señor senador Benítez se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación del que es autor junto con otros señores senadores por el que se solicita respuesta al informe requerido acerca del cumplimiento de la ley de doblaje. (S.-635/92.) (Pág. 2277.)
77. Manifestaciones de señores senadores respecto del proyecto de ley de los señores senadores Bravo y Posleman por el que se deroga el decreto 879/92 del Poder Ejecutivo. (S.-253/92.) (Pág. 2279.)
78. Homenaje a la mujer latinoamericana. (Pág. 2281.)
79. Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 2284.)

— En Buenos Aires, a las 16 y 31 del miércoles 26 de agosto de 1992.

I

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Britos). — Solicito a los presidentes de bloque convocar a los señores senadores. Si no concurren al recinto, teniendo en cuenta el Reglamento, se va a levantar la sesión.

Sr. Rubeo. — Señor presidente: ¿cuántos legisladores hay en el Senado?

Sr. Presidente (Britos). — Hay treinta y dos legisladores.

— Se continúa llamando.

— Luego de unos instantes:

Sr. Posleman. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: solicito que se llame por cinco minutos más y si al cabo de ese lapso no contamos con quórum se levante la sesión.

Sr. Presidente (Britos). — Así se hará.

Sr. Cass. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Pido que se amplíe el plazo en quince minutos.

Sr. Rubeo. — Apoyo la moción del señor presidente de la bancada radical.

Sr. Ludueña. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Ludueña. — Señor presidente: apoyo la moción del señor senador Posleman de que se llame por cinco minutos más y si no hay quórum se levante la sesión.

Sr. Presidente (Britos). — La Presidencia aclara que los señores presidentes de bloque se comprometieron a que hubiera quórum a más tardar a las 16.

Sr. Bittel. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Bittel. — Señor presidente: propongo que en el caso eventual de que no se llegue a reunir el quórum para sesionar se cite a sesión para mañana.

Sr. Presidente (Britos). — Le aclaro al señor senador que mañana es día de tablas. Por lo tanto, si hoy no hay sesión se realizará mañana.

— Se continúa llamando.

Sr. Presidente (Britos). — Ruego a los señores senadores que tomen asiento en sus bancas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento cumplido el tiempo vamos a levantar la sesión.

Sr. Brasesco. — Solicito se deje constancia de quiénes son los señores senadores presentes.

En este sentido, el estado de derecho ha consagrado un plexo normativo especial de carácter tuitivo y promotor para estas organizaciones que, más allá de su instrumentación y de su dinámica, sirve *ab initio* para acreditar la relevancia concedida a las mismas al tiempo que expresa la soberana voluntad de impulsar el nacimiento y/o fortalecimiento de otras tantas entidades de la especie a través de diversos cursos de acción, verbigracia franquicias postales y fiscales, subvenciones, préstamos, etcétera, tal lo establecido por la ley 23.351, sancionada el 7 de agosto de 1986.

El caso particular que motiva el presente proyecto sometido a consideración del honorable cuerpo legislativo, refiere a la Biblioteca Popular "Dr. Manuel Gorostiaga" de la ciudad de Santiago del Estero y llamada a satisfacer las necesidades de una inmensa población estudiantil carenciada que acude a la misma en búsqueda de los textos escolares necesarios para llevar adelante sus estudios obligatorios.

Por tal motivo el subsidio que se solicita habrá de tener por destino la construcción del techo de los sanitarios, obra iniciada hace más de cuatro años sin que hasta la fecha, por razones económicas se haya podido concluir.

Las razones que anteceden tanto institucionales como particulares, esto es, en relación a la población destinataria y a la perentoria necesidad de contar con tal vital servicio, dan fundamento suficiente tanto para la aprobación del presente como asimismo para la más célere y favorable resolución del poder administrador.

José O. Figueroa.

Sr. Presidente (Britos). — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

73

JUICIO ORAL EN EL AMBITO DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION

Sr. Presidente (Britos). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre implementación del juicio oral y de las instituciones incorporadas en las leyes 23.984 y 24.050 en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.

Encontrándose en antecala el señor ministro de Justicia de la Nación y funcionarios del área, si hay asentimiento se los invitará a ingresar en el recinto.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Britos). — Como hay asentimiento, así se hará.

— Ingresan en el recinto el señor ministro de Justicia de la Nación, doctor León C. Arslanián; el señor secretario de Justicia de la Nación, doctor Daniel Castruccio, y el asesor de gabinete del ministro, doctor Roberto J. Vásquez. (Varios señores senadores se acercan a saludarlos.)

Sr. Presidente (Britos). — Por Secretaría se dará lectura del dictamen contenido en el orden del día número 390.

Sr. Secretario (Piuze). — (*Lee*)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-31/92) sobre implementación del juicio oral y de las instituciones incorporadas en las leyes 23.984 y 24.050 en el ámbito del Poder Judicial de la Nación; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.

De acuerdo al artículo 117 del reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 24 de agosto de 1992.

Juan Ramón Aguirre Lanari. — Juan Trilla. — Jorge D. Solana. — Rogelio J. Nieves. — Carlos A. Juárez. — Pedro E. Molina. — Eduardo P. Vaca. — Julio A. Amoedo. — Felipe Ludueña.

En disidencia parcial

José Genoud.

DIPUTADOS

1

Buenos Aires, 13 de agosto de 1992.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Cámara Nacional de Casación Penal

Integración

Artículo 1º — Créase la Cámara Nacional de Casación Penal, que estará integrada por trece (13) miembros y funcionará dividida en cuatro (4) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia del Tribunal el miembro restante.

Secretarías - Creación

Art. 2º — Créase una secretaría general para la presidencia, cuatro (4) secretarías de Cámara y cuatro (4) prosecretarías de Cámara en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 3º — Créanse cuatro (4) fiscalías ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Transfórmense dos (2) cargos de fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en cargos de fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Trasládase una secretaría con su dotación de personal, de las fiscalías nacionales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Creación de cargos

Art. 4º — Créanse trece (13) cargos de juez de Cámara de Casación, un (1) cargo de secretario general, cuatro (4) cargos de secretario de Cámara, cuatro (4) cargos de prosecretario de Cámara, dos (2) cargos de fiscal de Cámara de Casación, tres (3) cargos de secretario de Fiscalía de Cámara, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara de Casación y un (1) cargo de secretario de Defensoría de Cámara.

Tribunales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal**Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal****Denominación - Integración**

Art. 5º — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal conservará su actual denominación e integración.

Juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal**Denominación**

Art. 6º — Los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Ministerio público - Supresión

Art. 7º — Suprímense dos (2) fiscalías nacionales que actúan ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Trasládase una (1) secretaría de fiscalía a las fiscalías ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Los fiscales nacionales adjuntos de la cámara recibirán instrucciones —por escrito— y estarán subordinados al titular de la Fiscalía de Cámara.

Tribunales orales en lo Criminal Federal - Creación

Art. 8º — Créanse seis (6) tribunales orales en lo Criminal Federal para la Capital Federal que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.

Secretarías - Creación

Art. 9º — Créanse seis (6) secretarías en los tribunales orales en lo Criminal Federal para la Capital Federal.

Ministerio público fiscal - Creación

Art. 10. — Créanse seis (6) fiscalías que, actuarán ante los tribunales orales en lo Criminal Federal para la Capital Federal.

Defensoría oficial - Creación

Art. 11. — Créase una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes de Cámara que actuará ante los tribunales orales en lo Criminal Federal para la Capital Federal y supletoriamente ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Créanse tres (3) defensorías de pobres, incapaces y ausentes ante los tribunales federales de la Capital Federal que actuarán ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

Causas en trámite

Art. 12. — Las causas actualmente en trámite ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y ante los juzgados mencionados en el artículo sexto (6º) quedarán radicadas ante los mismos. Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado, la opción prevista en el párrafo anterior debe ser ejercitada en forma unánime.

En todos los casos la opción prevista en este artículo sólo podrá ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación.

Quien o quienes al momento de ejercitar la opción hubieran estado rebeldes o prófugos, no podrán modificar la decisión del régimen procesal escogido por quienes lo hicieron en la oportunidad prevista por la presente ley.

Creación de cargos

Art. 13. — Créanse dieciocho (18) cargos de juez de Cámara, seis (6) cargos de secretario de Cámara, seis (6) cargos de fiscal de Cámara, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara, y tres (3) cargos de defensores de pobres, incapaces y ausentes.

Tribunales en lo Criminal y Correccional Federal del interior del país**Juzgados federales del interior del país con competencia penal****Denominación**

Art. 14. — Los juzgados federales de Primera Instancia con competencia criminal y correccional, con asiento en

el interior del país, mantendrán su actual denominación e integración. Aquellos juzgados con competencia exclusiva en lo criminal y correccional modificarán su denominación conforme lo dispuesto en la presente ley.

Cámaras Federales de Apelaciones del interior del país

Denominación - Integración

Art. 15. — Las cámaras federales de apelaciones del interior del país, conservarán su actual denominación e integración con las excepciones establecidas en el artículo siguiente.

Tribunales orales en lo Criminal Federal del interior del país

Art. 16. — Créanse diez (10) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en los distritos judiciales de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Corrientes, General Roca, Mar del Plata, Paraná, Posadas, Resistencia, Salta y Tucumán. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal correspondiente al distrito judicial de General Roca tendrá su asiento en la ciudad del mismo nombre.

Créanse cinco (5) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en el distrito judicial de San Martín.

Créanse dos (2) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en Córdoba.

Transfórmase una de las salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza en Tribunal Oral en lo Criminal Federal con sede en dicha ciudad.

Créase una secretaría para actuar ante cada uno de los tribunales orales que se crean por el presente artículo.

Créanse en el distrito judicial de Rosario dos (2) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en la ciudad de Rosario, y uno (1) con asiento en la ciudad de Santa Fe. Transfórmase tres (3) vocalías de cámara y una secretaría de cámara creadas por ley 23.870 en vocalías ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario creadas por el párrafo anterior y en una secretaría para actuar ante el mismo.

Créanse dos (2) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en la ciudad de La Plata. Transfórmase tres (3) vocalías de la Cámara federal de Apelaciones de La Plata en vocalías ante los tribunales orales que se crean.

Créase una secretaría y trasládase una secretaría de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, para que actúen ante los dos (2) tribunales orales en lo Criminal Federal de La Plata.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hará saber al Poder Ejecutivo nacional la necesidad de la creación de un número mayor de órganos jurisdiccionales federales y el lugar de funcionamiento.

Ministerio público fiscal

Art. 17. — Créanse veintitrés (23) fiscalías, que actuarán ante los tribunales orales en lo Criminal Federal del interior del país.

Defensorías

Art. 18. — Créase una defensoría de pobres, incapaces y ausentes de Cámara ante cada uno de los tribunales

orales en lo Criminal Federal del interior del país, quienes también desempeñarán las funciones que encomienden los artículos 411 y 413 de la ley 23.984 a los asesores de menores.

Causas en trámite

Art. 19. — Las causas en trámite ante los juzgados federales y cámaras federales de apelaciones a que se refieren los artículos 14 y 15 serán sustanciados conforme lo indica el artículo 12 de la presente ley.

Creación de cargos

Art. 20. — Créanse sesenta (60) cargos de juez de Cámara, veintitrés (23) cargos de fiscal de Cámara, veintitrés (23) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara y veintiún (21) cargos de secretario de Cámara.

Creación e implementación de otros tribunales orales en lo Criminal Federal del interior del país

Art. 21. — Créanse once (11) tribunales orales en lo Criminal Federal con asiento en las respectivas provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Los tribunales que se crean por esta disposición comenzarán a funcionar en un plazo que no excederá al 1° de abril de 1993.

Creación de cargos

Art. 22. — Créanse treinta y tres (33) cargos de juez de Cámara, once (11) cargos de fiscal de Cámara, once (11) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara y once (11) cargos de secretarios de Cámara.

CAPÍTULO II

Tribunales nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal

Denominación - Integración - Transformación

Art. 23. — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal conservará su actual denominación. Estará integrada por dieciséis (16) miembros y funcionará dividida en cinco (5) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia el miembro restante.

Transfórmase dos (2) salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación seleccionará las salas mencionadas precedentemente.

Causas en trámite

Art. 24. — Las causas en trámite ante las dos (2) salas que se transforman por el artículo anterior se distribuirán en forma equitativa entre las cinco (5) salas que

continúan integrando la citada Cámara. Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado; la opción prevista en el párrafo anterior debe ser ejercitada en forma unánime.

En todos los casos la opción prevista en este artículo sólo podrá ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación.

En lo Criminal

Juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal

Denominación

Art. 25. — Los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción en la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal.

Transformación

Art. 26. — Excepto los mencionados en el artículo 48, transfórmanse los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia en juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción números 1, 9, 16, 32 y 34 a 49 de la Capital Federal.

Secretarías - Traslado

Art. 27. — Traslándose veinte (20) secretarías de los actuales juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción a los veinte (20) nuevos juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción resultantes de la transformación dispuesta en el artículo anterior, lo que se hará efectivo en forma coincidente con la entrada y funcionamiento de estos últimos.

En la oportunidad prevista en el artículo 35, trasládanse nueve (9) secretarías de los actuales juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción a las fiscalías que deberán actuar ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción.

Ministerio público fiscal - Actuación - Creación

Art. 28. — Las fiscalías ante los actuales juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal números 1 al 26, actuarán ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción.

Créanse a esos mismos efectos veintitrés (23) fiscalías que se identificarán con los números 27 al 49.

Secretarías - Creación - Integración

Art. 29. — Créanse cuarenta y nueve (49) secretarías ante las fiscalías mencionadas en el artículo anterior, que se integrarán con las secretarías que se trasladan en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 33.

Personal

Art. 30. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación, podrá disponer la reasignación del personal de todas las fiscalías, de modo tal que éstas tengan dotaciones equivalentes de personal.

Defensorías oficiales

Art. 31. — Las defensorías oficiales ante los actuales juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal actuarán ante los juzgados nacionales en lo Criminal Nacional de Instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Causas en trámite

Art. 32. — Los actuales juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal continuarán con la sustanciación de las causas radicadas ante los mismos, y conservarán las dos (2) secretarías que los integran en la actualidad, hasta que se operen los traslados dispuestos en el artículo 27. Las causas radicadas ante las nueve (9) secretarías que se trasladan a las fiscalías, serán distribuidas en forma equitativa entre las cuarenta y nueve (49) secretarías restantes, según el criterio que determine la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Juzgados de sentencia - Traslados de secretarías

Art. 33. — Cuando se haga efectiva la transformación dispuesta en el artículo 26, los titulares de los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia pasarán a desempeñarse como jueces nacionales en lo criminal de instrucción.

Simultáneamente con lo dispuesto en el párrafo que antecede, las secretarías respectivas se trasladarán a las fiscalías mencionadas en el artículo 28.

Causas en trámite ante juzgados de sentencia

Art. 34. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia proseguirán con la sustanciación y terminarán todas las causas radicadas ante los mismos de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado, la opción prevista en el párrafo anterior debe ser ejercitada en forma unánime.

En todos los casos la opción prevista en este artículo debe ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación.

Art. 35. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación seleccionará diez (10) de los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia, a los fines establecidos en el artículo anterior. Los diez (10) juzgados restantes se transformarán, a partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26; sus titulares y secretarías tendrán el destino que les asigna el artículo 33, conforme lo

determine el órgano judicial competente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijará el criterio con que se efectuará la distribución equitativa de las causas radicadas ante estos últimos juzgados entre los diez (10) primeros, y les fijará un plazo prudencial para el cumplimiento de su cometido.

Tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal

Art. 36. — Créanse treinta (30) tribunales orales en lo Criminal para la Capital Federal. Dos (2) de ellos se integrarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 segundo párrafo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá disponer la reasignación de su personal en función de las necesidades de los restantes tribunales orales.

Art. 37. — Créanse treinta (30) secretarías ante los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal. Dos (2) secretarías de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a elección de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se transfieren a los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal.

Ministerio público fiscal

Art. 38. — Créanse treinta (30) fiscalías ante los tribunales orales de la Capital Federal.

Defensorías oficiales

Art. 39. — Créanse diez (10) defensorías de pobres, incapaces y ausentes ante los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal.

Creación de cargos - Integración

Art. 40. — Créanse ochenta y cuatro (84) cargos de juez de cámara. Los restantes cargos de juez de Cámara se integrarán con seis (6) cargos de vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23. Los veinte (20) cargos de juez de primera instancia para los nuevos juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, procedentes de la transformación dispuesta por el artículo 36, integran con los veinte (20) cargos de juez de primera instancia correspondientes a los titulares de los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia, cuya transformación dispone el artículo citado.

Art. 41. — Créanse treinta (30) cargos de fiscal de Cámara, diez (10) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara, veintitrés (23) cargos de fiscal de primera instancia y veintiocho (28) cargos de secretario de Cámara. Los cuarenta y nueve (49) cargos de secretario de primera instancia para las secretarías que se crean por el artículo 29 ante las fiscalías que deben actuar ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal se integran con los cuarenta y nueve (49) cargos de secretario de primera instancia correspondientes a las secretarías que se trasladan en virtud de lo dispuesto en los artículos 27 y 33.

En lo correccional

Denominación - Creación

Art. 42. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional letras G, H, I, J y N, se denominarán juzgados nacionales en lo correccional y se enunciarán con los números 1, 2, 3, 4 y 5.

Créanse nueve (9) juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal, que se enunciarán con los números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que contarán con dos (2) secretarías cada uno.

Secretarías - Traslado

Art. 43. — Los juzgados nacionales en lo correccional números 1, 2, 3, 4 y 5 conservarán dos de las secretarías que poseen actualmente.

Las restantes secretarías con todo su personal, a opción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasarán a integrar los juzgados que se crean números 6, 7, 8, 9 y 10.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 44. — Créanse catorce (14) fiscalías ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal. Créanse catorce (14) secretarías ante las fiscalías mencionadas en el presente artículo.

Defensorías - Creación

Art. 45. — Créanse siete (7) defensorías de pobres, incapaces y ausentes que actuarán ante los juzgados nacionales en lo Correccional de la Capital Federal, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y supletoriamente ante la Cámara Nacional de Casación Penal.

Causas en trámite

Art. 46. — Los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional remitirán a los juzgados nacionales en lo correccional que se crean por la presente ley, para su tramitación definitiva, las causas radicadas ante los mismos correspondientes a las secretarías que se trasladan conforme lo dispuesto por el artículo 43.

Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o el acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado, la opción prevista en el párrafo anterior debe ser ejercitada en forma unánime.

En todos los casos la opción prevista en este artículo sólo podrá ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación.

Creación de cargos

Art. 47. — Créanse nueve (9) cargos de juez nacional en lo correccional, catorce (14) cargos de fiscal ante los juzgados nacionales en lo correccional, siete (7) cargos de

defensor de pobres, incapaces y ausentes y veintidós (22) cargos de secretario de juzgado nacional en lo correccional.

Tribunales de Menores de la Capital Federal

Transformación

Art. 48. — Transfórmense los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de sentencia letras M y R, los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción números 1, 9 y 16 y los actuales juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional letras L y G en juzgados nacionales de menores números 1 a 7, respectivamente.

Los juzgados mencionados precedentemente pasarán a los nuevos destinos con su dotación completa de personal, en la forma que lo disponga esta ley y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Secretarías

Art. 49. — Transfiérense a los juzgados nacionales de menores, veintidós (21) secretarías de las que integrarán actualmente los juzgados nacionales de primera instancia a que se refiere el artículo 48.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 50. — Créanse siete (7) fiscalías ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal.

Créanse siete (7) secretarías ante las fiscalías creadas en el presente artículo.

Defensoría oficial - Creación

Art. 51. — Créanse una defensoría de pobres, incapaces y ausentes ante los juzgados nacionales de menores de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Tribunales orales de menores - Creación

Art. 52. — Créanse tres (3) tribunales orales de menores para la Capital Federal que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.

Secretaría - Creación

Art. 53. — Créanse tres (3) secretarías en los tribunales orales de menores de la Capital Federal.

Ministerio público o fiscal - Creación

Art. 54. — Créanse tres (3) fiscalías que actuarán ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal.

Defensoría oficial - Creación

Art. 55. — Créanse una defensoría de pobres, incapaces y ausentes de Cámara ante los tribunales orales de menores de la Capital Federal y ante la Cámara Nacional de Casación.

Asesoría de menores - Creación

Art. 56. — Créanse cuatro (4) asesorías de menores que actuarán en los supuestos previstos por el capítulo II del título II del libro III del Código Procesal Penal de la Nación, cualquiera sea el tribunal ante el cual se sustancie el proceso.

Superintendencia del servicio social tutelar - Creación

Art. 57. — Créase la Superintendencia del Servicio Social Tutelar en el ámbito que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Equipo interdisciplinario para tribunales de menores - Creación

Art. 58. — Créanse tres (3) equipos interdisciplinarios para los tribunales de menores que cumplirán las funciones establecidas en el artículo 14 de la ley 24.050.

Causas en trámite

Art. 59. — Las causas actualmente en trámite ante los juzgados enunciados en el artículo 48 quedarán radicadas ante los nuevos juzgados nacionales de menores a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.984, y proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado la opción prevista en el párrafo anterior debe ser ejercitada en forma unánime.

En todos los casos la opción prevista en este artículo sólo podrá ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación.

Creación de cargos

Art. 60. — Créanse nueve (9) cargos de juez de Cámara, tres (3) cargos de fiscal de Cámara, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes de Cámara, cuatro (4) cargos de asesor de menores y tres (3) cargos de secretario de Cámara.

Créanse siete (7) cargos de fiscal de primera instancia, siete (7) cargos de secretario de primera instancia y un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes.

Créanse un (1) cargo de superintendente del servicio social tutelar y catorce (14) cargos de asistentes sociales tutelares. Créanse tres (3) cargos de médico especializado en psiquiatría infanto-juvenil, tres (3) cargos de psicólogos especializados en problemas infanto-juveniles y seis (6) cargos de asistentes sociales con título habilitante especializados en problemas infanto-juveniles.

En lo penal económico Denominación - Integración

Art. 61. — Los juzgados nacionales de primera instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal se denominarán juzgados nacionales en lo Penal Económico y se integrarán con dos (2) secretarías cada uno.

Ministerio público - Creación - Secretarías

Art. 62. — Créanse cuatro (4) fiscalías ante los juzgados nacionales en lo penal económico y ante la Cámara Federal, que actuarán juntamente con las fiscalías existentes en el fuero.

Créanse ocho (8) secretarías que actuarán en cada una de las fiscalías del fuero penal económico.

Defensorías

Art. 63. — Las actuales defensorías de pobres, incapaces y ausentes continuarán actuando ante los juzgados nacionales en lo penal económico y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal

Denominación - Integración

Art. 64. — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal conservará su actual denominación.

Una sala se integrará con tres (3) jueces de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación comunicará al Poder Ejecutivo nacional la necesidad de la creación de la sala restante de dicha Cámara.

Transformanse dos (2) salas de la citada Cámara en tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación seleccionará los jueces de cámara que pasarán a cumplir funciones ante los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal.

Secretarías

Art. 65. — El personal de una de las actuales salas a elección de la Corte Suprema de Justicia de la Nación seguirá desempeñándose en la Cámara.

El resto pasará a desempeñarse en los tribunales orales en lo penal económico que se crean por esta ley conforme lo establecido por el artículo 66.

Tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal

Integración

Art. 66. — Créanse cuatro (4) tribunales orales en lo penal económico para la Capital Federal, que estarán integrados por tres (3) miembros cada uno.

Créanse ocho (8) cargos de juez de Cámara. Los cuatro (4) cargos restantes se integrarán con los procedentes de la actual Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Secretarías - Creación

Art. 67. — Créanse dos (2) secretarías en los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal. Trasládanse dos (2) secretarías de la actual Cámara Na-

cional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, a elección de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con su dotación completa de personal, a los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal que se crean por esta ley.

Ministerio público fiscal - Creación

Art. 68. — Créanse cuatro (4) fiscalías que actuarán ante los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal.

Defensorías - Creación

Art. 69. — Créanse dos (2) defensorías que actuarán ante los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal.

Causas en trámite

Art. 70. — Las causas actualmente en trámite por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal y por ante los juzgados nacionales en lo penal económico de la Capital Federal quedarán radicadas ante los mismos. Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con las disposiciones de la ley 2.372 y sus modificatorias, salvo que el procesado o acusado solicitare la aplicación del procedimiento previsto en la ley 23.984 dentro de los quince (15) días de notificado legalmente para el ejercicio de esa opción.

En las causas en que hubiere más de un procesado o acusado la opción prevista en el párrafo anterior debe ser ejercitada en forma unánime.

En todos los casos la opción prevista en este artículo sólo podrá ser ejercitada con anterioridad a la contestación del traslado de la acusación.

Las salas que se transforman en tribunales orales en lo penal económico remitirán sus causas para la tramitación correspondiente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal.

Creación de cargos

Art. 71. — Créanse ocho (8) cargos de juez de cámara, cuatro (4) cargos de fiscal de cámara, dos (2) cargos de defensor de pobres, incapaces y ausentes de cámara, cuatro (4) cargos de fiscal de primera instancia, dos (2) cargos de secretario de cámara, ocho (8) cargos de secretario de primera instancia y seis (6) cargos de peritos contadores para el fuero penal económico de la Capital Federal.

Juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal

Art. 72. — Créanse tres (3) juzgados nacionales de ejecución penal para la Capital Federal, que contarán con una (1) secretaría cada uno. Tendrán la competencia territorial correspondiente al distrito judicial de Capital Federal, conforme lo determina la ley de organización del Poder Judicial de la Nación para la implementación del procedimiento penal oral.

Las funciones que establece el Código Procesal Penal de la Nación para el juez de ejecución penal serán ejercidas por el tribunal que se crea por esta ley.

Secretarías

Art. 73. — Créanse tres (3) secretarías que actuarán ante los juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal que se crean por la presente ley.

Causas con sentencia condenatoria firme

Art. 74. — A partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984 los juzgados nacionales remitirán a los juzgados nacionales de ejecución penal todas aquellas causas con sentencia firme en las que hubiere condena, conforme al modo de distribución que la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente determine para los nuevos juzgados de ejecución.

Juez de ejecución del interior del país

Art. 75. — Las funciones del juez de ejecución que establece el Código Procesal Penal de la Nación serán desempeñadas, en el interior del país, por un juez del tribunal oral respectivo, conforme lo determine el órgano judicial competente.

Sus decisiones serán recurribles ante la Cámara Federal de Apelaciones, cabecera del distrito o ante el órgano judicial competente, según el caso.

En los casos de suspensión del proceso a prueba, las ejercerá el juez que dictó el beneficio.

Causas con sentencia condenatoria firme

Art. 76. — A partir de la entrada en vigencia de la ley 23.984, los juzgados federales del interior del país remitirán, cuando corresponda, al miembro del tribunal oral respectivo que cumpla la función de juez de ejecución, todas aquellas causas con sentencia condenatoria firme.

Creación de cargos

Art. 77. — Créanse tres (3) cargos de juez de primera instancia, un (1) cargo de fiscal de primera instancia, un (1) cargo de defensor de pobres, incapaces y ausentes de primera instancia, que actuarán ante los juzgados de ejecución penal de la Capital Federal, y cuatro (4) cargos de secretarios de primera instancia. Una de estas secretarías actuará ante la fiscalía que se crea por el presente artículo.

Créanse dos (2) cargos de médico, dos (2) cargos de médico psiquiatra, dos (2) cargos de psicólogo y cuatro (4) cargos de asistente social para el equipo interdisciplinario de los juzgados nacionales de Ejecución Penal de la Capital Federal.

Créanse diecisiete (17) cargos de secretario de primera instancia para las oficinas que establece el artículo 29, párrafos tercero y cuarto de la ley orgánica respectiva en las unidades penitenciarias números 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 26, 30 y 32.

En lo penal de rogatorias - Denominación - Integración

Art. 78. — El Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias conservará su actual denominación e integración.

Procuración General de la Nación

Art. 79. — Créanse dos (2) cargos de procurador fiscal con atribuciones y competencias conforme lo establecido por la ley 15.464.

CAPITULO III

Policía Judicial
Secretaría - Creación

Art. 80. — Créase la Policía Judicial en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Créase la Secretaría de Sumarios y Asuntos Judiciales.

La Policía Federal cumplirá con las funciones asignadas a la Policía Judicial por la ley 23.984.

Creación de cargos

Art. 81. — Créase un (1) cargo de director de la Policía Judicial y un (1) cargo de secretario de Sumarios y Asuntos Judiciales.

Créanse cincuenta y dos (52) cargos de secretario de primera instancia que cumplirán las funciones de asistentes jurídicos de la prevención.

Oficina de Asesoramiento y Asistencia
a Víctimas y Testigos

Art. 82. — Créase la Oficina de Asesoramiento y Asistencia a Víctimas y Testigos.

Créase un (1) cargo de director de la Oficina de Asesoramiento y Asistencia a Víctimas y Testigos.

Créanse dos (2) cargos de trabajadores sociales, dos (2) encargados de psicólogos y dos (2) cargos de abogados para la integración del equipo interdisciplinario mencionado en el artículo 40 de la ley 24.050 juntamente con el personal administrativo, técnico y de maestranza que le asigne la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 83. — Créase una (1) Oficina de Administración Judicial, una (1) Dirección de Informática Jurídica y un (1) Archivo General.

Cuerpo médico forense

Art. 84. — Créanse seis (6) cargos de médico forense, dos (2) cargos de médico anatomopatólogo, dos (2) cargos de perito químico y un (1) cargo de odontólogo con orientación en medicina legal.

Creación de cargos

Art. 85. — Créanse los cargos de personal administrativo, técnico, de servicio y de maestranza en los distintos órganos que se detallan en los anexos I a X que forman parte integrante de la presente ley.

Art. 86. — Créase una prosecretaría de primera instancia ante cada uno de los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción, correccional, de menores, en lo penal económico, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y en los juzgados federales del interior del país.

Art. 87. — Transformanse los actuales cargos de prosecretario administrativo de los juzgados a que alude el artículo anterior, en cargos de prosecretario de primera instancia.

Modificaciones

Art. 88. — Sustitúyese el inciso 3º del artículo 24 de la ley 23.984 por el siguiente: "de las cuestiones de competencia que se planteen entre ellos".

Sustitúyese el inciso 1º del artículo 55 de la ley 23.984, por el siguiente: "si hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del ministerio público, defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de alguna de las partes involucradas".

Sustitúyese el artículo 187 de la ley 23.984 por el siguiente: "Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad que violen disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente serán sancionados, salvo que se aplique el Código Penal, por el tribunal superior de oficio o a pedido de parte y previo informe del interesado, con apercibimiento, multa de acuerdo con el artículo 159 segunda parte o arresto de hasta 15 días, recurribles —dentro de los tres días— ante el órgano judicial que corresponda, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pueda aplicarles la autoridad de quien dependa la policía o la fuerza de seguridad de que se trate".

Agrégase como último párrafo del artículo 196 de la ley 23.984, el siguiente: "Los jueces en lo correccional, en lo penal económico, de menores, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y federales con asiento en las provincias, tendrán la misma facultad que el párrafo primero del presente artículo otorga a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción".

Deróganse los artículos 536 y 537 de la ley 23.984.

Art. 89. — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 3º de la ley 24.050, por el siguiente: "Sin perjuicio de la competencia territorial de los tribunales orales en lo criminal federal que se instalarán en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego a los efectos de la organización judicial de los tribunales nacionales en materia penal, el territorio de la República se dividirá en los distritos judiciales que la presente ley y leyes especiales establezcan, a saber:"

Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.050 por el siguiente: "La Cámara Nacional de Casación Penal estará integrada por trece (13) miembros, y funcionará dividida en cuatro (4) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia del tribunal el juez restante.

Tendrá competencia territorial en toda la República considerada a este efecto como una sola jurisdicción judicial. En razón de la materia, tendrá la competencia determinada por el Código Procesal Penal y leyes especiales. Una de las salas juzgará de los recursos previstos por el artículo 445 bis de la ley 14.029 (Código de Justicia Militar)".

Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 18 de la ley 24.050, por el siguiente: "Estará integrada por dieciséis (16) miembros y funcionará dividida en cinco (5) salas de tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia el miembro restante".

Art. 90. — Además de la competencia que les atribuye el artículo 16 de la ley 24.050 y con la salvedad derivada de lo establecido en el artículo 75 de la presente ley, los tribunales orales en la criminal federal con asiento en las

provincias conocerán en los supuestos establecidos en el artículo 24 de la ley 23.984, excepto en aquellas provincias donde funcionan cámaras federales de apelaciones.

Disposiciones transitorias

Art. 91. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de las facultades de superintendencia que le son propias, podrá designar el personal necesario y dictar las normas complementarias que posibiliten la integración escalonada y la puesta en funcionamiento de los órganos creados por la ley 24.050 y por la presente, pudiendo delegar esas facultades en la Cámara Nacional de Casación Penal, en las Cámaras nacionales de apelación o en el tribunal oral respectivo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación o el órgano judicial competente, determinará el criterio de distribución equitativa de las causas en trámite y de aquellas iniciadas a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.984.

Financiamiento

Art. 92. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, en lo que hace a la instalación y funcionamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal, sus fiscalías y defensorías (anexo I); quince (15) tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal, sus fiscalías y defensorías (anexo IV); dos (2) tribunales orales de menores; una (1) asesoría de menores (anexo VI); dos (2) tribunales orales en lo penal económico, sus fiscalías y defensorías (anexo VII); dos (2) tribunales orales federales de la Capital Federal (anexo II); y un tribunal oral por cada distrito judicial del interior del país con fiscalías y defensorías (anexo III); tres (3) jueces nacionales de ejecución penal con su fiscalía y defensoría (anexo VIII); dos (2) cargos de procurador fiscal con sus secretarías en la procuración general (anexo VIII); cincuenta y dos (52) cargos de secretario de primera instancia para la Policía Judicial y un (1) administrador judicial (anexo X), todos con sus respectivas dotaciones, se financiarán con los recursos establecidos en los artículos 2º y 3º de la ley 23.853, imputándose a los créditos presupuestarios del ejercicio 1992.

Respecto de la instalación y funcionamiento de los demás órganos que prevé la presente ley, quedarán imputados al presupuesto del Poder Judicial de la Nación correspondiente al año 1993, debiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptar los recaudos necesarios.

El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia, fijará el plan de entrada en funcionamiento; atendiendo a las necesidades del servicio de justicia.

Art. 93. — La Corte Suprema de Justicia de la Nación distribuirá al personal actualmente existente en el Poder Judicial de la Nación de modo que permita la instalación de todos los órganos creados por la presente ley.

Art. 94. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO R. PIERRI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ANEXO I

Partida presupuestaria 1992

Cámara Nacional de Casación Penal

Magistrados y funcionarios

Juez de Cámara de Casación	13
Secretario general	1
Secretario de Cámara	4
Prosecretario de Cámara	4
Fiscal de Cámara de Casación	2
Secretario de Fiscalía de Cámara	3
Defensor de Cámara de Casación	1
Secretario de Defensoría de Cámara	1

Personal administrativo

Prosecretario administrativo	7
Oficial superior	7
Auxiliar superior (relator)	16
Auxiliar superior de 6ª	—
Auxiliar principal de 5ª	—

Personal de servicio

Auxiliar principal de 7ª	12
Total	92

ANEXO II

Partida presupuestaria 1992

Tribunales orales en lo Criminal Federal
de la Capital Federal

Magistrados y funcionarios

Juez de Cámara	18
Fiscal de Cámara	6
Defensor oficial de Cámara	1
Secretario de Cámara	6
Defensor de pobres, incapaces y ausentes	3
Total	34

ANEXO III

Partida presupuestaria 1992

Tribunales orales en lo criminal federal del interior

Magistrados y funcionarios

Juez de Cámara	60
Fiscal de Cámara	23
Defensor oficial de Cámara	23
Secretario de Cámara	21

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo (ujier)	17
Prosecretario administrativo (oficial 1ª)	81
Auxiliar superior	81
Auxiliar superior de 6ª	30
Auxiliar superior de 5ª	20

Personal de servicio

Auxiliar principal de 7ª	19
Total	365

Partida presupuestaria 1993

Tribunales orales en lo Criminal
Federal del Interior a implementar

Magistrados y funcionarios

Juez de Cámara	33
Fiscal de Cámara	11
Defensor oficial de Cámara	11
Secretario de Cámara	11

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo (ujier)	11
Prosecretario administrativo (oficial 1ª)	44
Auxiliar superior	44
Auxiliar superior de 6ª	11
Auxiliar superior de 5ª	11

Personal de servicio

Auxiliar principal de 7ª	11
Total	196

ANEXO IV

Partida presupuestaria 1992/93

Tribunales orales criminales
de Capital Federal

Magistrados y funcionarios

Juez de Cámara	84
Fiscal de Cámara	30
Defensor oficial de Cámara	10
Secretario de Cámara	28

Personal administrativo

Prosecretario administrativo (oficial 1ª)	30
Auxiliar superior (relator)	30

Personal de servicio

Auxiliar principal de 7ª	30
Subtotal	242

Ministerio público fiscal de instrucción

Funcionarios

Fiscal de primera instancia	23
Total	275

ANEXO V

Partida presupuestaria año 1993

Juzgados correccionales de Capital Federal

Magistrados

Juez de primera instancia	9
---------------------------	---

Ministerio público ante los juzgados nacionales
de la Capital Federal

Funcionarios

Fiscal de primera instancia	14
Secretario de primera instancia	22
Subtotal	45

*Defensoría de Pobres, Incapaces y Ausentes**Funcionarios*

Defensores de pobres, incapaces y ausentes	7
Total	52

ANEXO VI

Partida presupuestaria 1992/93

*Tribunales orales de Menores de Capital Federal**Magistrados y funcionarios*

Juez de Cámara	9
Fiscal de Cámara	3
Defensor oficial de Fiscalía de Cámara	1
Asesor de Menores de 2ª Instancia	4
Secretario de Cámara	3

Personal administrativo y técnico

Prosecretario administrativo (oficial 1º)	3
Auxiliar superior (relator)	3
Auxiliar superior de 6ª	3
Auxiliar principal de 5ª	3

Personal de servicio

Auxiliar principal de 7ª	3
Total	35

Personal administrativo y técnico

Prosecretario jefe	1
Prosecretario administrativo	2
Subtotal	18

Equipo interdisciplinario para tribunales de menores

Médico especializado en psiquiatría infanto-juvenil (fiscal de 1ª instancia)	3
Psicólogo especializado en problemas infanto-juveniles (fiscal de 1ª instancia)	3
Asistentes sociales con título habilitante especializados en problemas infanto-juveniles (secretario de 1ª instancia)	6
Subtotal	12

Cuerpo médico forense

Médico forense (fiscal de 1ª instancia)	6
Médico anatomopatólogo (fiscal de 1ª instancia)	2
Perito químico (fiscal de 1ª instancia)	2
Odontólogo orientación medicina legal (fiscal de 1ª instancia)	1
Subtotal	11
Total	96

ANEXO VII

Partida presupuestaria 1992/93

*Tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal**Magistrados y funcionarios*

Juez de cámara	8
Fiscal de cámara	4

Defensor oficial de cámara	2
Secretario de cámara	2

Personal administrativo

Prosecretario administrativo (oficial 1º)	4
Subtotal	20

*Ministerio público ante los juzgados nacionales en lo penal económico de la Capital Federal**Funcionarios*

Fiscal de primera instancia	4
Secretario de primera instancia	8
Subtotal	12

Peritos contadores del fuero penal económico

Perito contador (secretario de 1ª instancia)	6
Total	38

ANEXO VIII.

Magistrados y funcionarios

Juez de 1ª instancia	3
Fiscal de 1ª instancia	1
Defensor oficial de 1ª instancia	1
Secretario de 1ª instancia	4

Oficina de ejecución penal

Secretario de 1ª instancia	17
--------------------------------------	----

Equipo interdisciplinario de ejecución penal

Médico (secretario de Cámara)	2
Médico psiquiatra (fiscal de 1ª instancia)	2
Psicólogo (secretario de Cámara)	2
Asistente social (Secretario de 1ª instancia)	4
Subtotal	36

Partida presupuestaria 1992

Procuración General de la Nación

Procurador fiscal (juez de Cámara)	2
Auxiliar superior (relator)	4
Subtotal	6
Total	42

ANEXO IX

*Policía Judicial**Personal superior*

Director de Policía Judicial (fiscal de 1ª instancia)	1
Secretario de Sumario y Asuntos Judiciales (secretario de Cámara)	1
Secretario de 1ª instancia	52
Total	54

ANEXO X*

Partida presupuestaria 1992/93

*Oficina de Asesoramiento y Asistencia a la Víctima
y al Testigo**Personal superior*

Director (fiscal de 1ª instancia)	1
Asistente social (secretario de 1ª instancia)	2
Psicólogo (secretario de 1ª instancia)	2
Abogado (secretario de 1ª instancia)	2

*Policía Judicial**Personal superior*

Administrador judicial (secretario de Cámara)	1
---	---

*Archivo General**Personal superior*

Director (secretario de Cámara)	1
---	---

*Dirección de Informática Jurídica**Personal superior*

Director (secretario de Cámara)	1
Total	10

Sr. Presidente (Britos). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: voy a pronunciar pocas palabras para fundamentar este proyecto que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y que seguramente habrá de convertirse hoy en ley de la Nación.

El Congreso Argentino cumplirá así una obligación comprometida, habida cuenta también de que está acuciado por el vencimiento de los términos.

En realidad, hoy venimos a dar la puntada final a un proceso que tiene su columna vertebral en el Código Procesal que aprobáramos en agosto del año pasado y que tuvo otra piedra liminar en su camino con la sanción de la ley de competencia o ley orgánica del Poder Judicial de la Nación.

Esta es la tercera fase como consecuencia de la cual vamos a dar los instrumentos necesarios, la estructura tribunalicia que requería aquella sanción inicial, para poder actuar en plenitud con la eficacia y con los elementos que naturalmente se exigen.

En realidad, señor presidente, no voy a agregar demasiadas argumentaciones a la que di

en oportunidad del tratamiento del Código Procesal Penal de la Nación y la ley orgánica de tribunales. Quiero decir que estamos dando la fatídica que necesita ese código para su aplicación en los casos concretos, como seguramente habrá de suceder a partir de la semana que viene.

Este proyecto de ley crea ciertos elementos interesantes, algunos de los cuales fueron introducidos como consecuencia de la labor de comisión que se hizo, contando con la anuencia del Ministerio de Justicia que estuvo empeñado, desde luego —como lo demuestra hoy con la propia presencia del ministro y con la permanente preocupación que hemos advertido en el titular de la cartera—, en que demos sanción a esta iniciativa.

En esa oportunidad se agregó la creación de tribunales orales en todas las provincias, que no existían en el proyecto original. Pero la comisión consideró oportuno crearlos y lo hizo con la conformidad del propio Ministerio de Justicia.

En esta ocasión tuvo una participación especial el diputado de mi partido por la provincia de Corrientes, doctor Nicolás Garay, quien en su exposición recordó que en el proyecto inicial existían los llamados jueces itinerantes que eran necesarios, conforme se estructuraba el proyecto en ese momento, porque al no existir tribunales orales en todas las provincias se debían trasladar a aquellas que carecían de ellos. Y no solamente debíanlo hacer los jueces, sino también todos aquellos miembros cuya presencia era necesaria para la tramitación del respectivo juicio.

Pero haciendo cuentas se llegó a la conclusión —acertada a mi juicio— de que era más conveniente crear nuevos tribunales donde no existían permanentemente porque así se atendía mejor el proceso de la inmediación, que es un elemento fundamental dentro del derecho procesal para que el juez pueda tener un contacto directo con los distintos elementos que hacen al juicio. Ese principio de inmediación fue recordado por los miembros informantes de la Cámara de Diputados y está establecido incluso en el artículo 102 de la Constitución Nacional y en un artículo del Código Procesal, que es el 4º de la ley 24.050, en el que se señala que el debate se realizará y la sentencia se dictará en la provincia o territorio donde el hecho se hubiere cometido.

Creo que se trata de una reforma feliz que ha permitido cumplir con ese proceso de inmediación, al mismo tiempo que no aumenta los costos operativos, habida cuenta de lo que habría significado la existencia de esos llamados jueces iti-

nerantes si hubieran tenido que trasladarse a cada provincia con todos los elementos necesarios para labrar las actuaciones respectivas.

En resumidas cuentas, señor presidente, aquel artículo 539 del nuevo Código Procesal que condicionaba su vigencia efectiva a la sanción de la ley orgánica o de competencia y la creación de los tribunales necesarios, ve hoy cumplida esta tercera etapa, esta última etapa a la que acabamos de referirnos y que viene a coronar un camino que debíamos transitar. Y era necesario para poder realizar un propósito en cuya virtud la Capital de la Nación y la Justicia Federal de la Nación se van a poner a tono con lo que ya era un adelanto prácticamente en todo el interior del país al haber adoptado el proceso de oralidad.

Sin embargo, señor presidente, creo —por lo menos desde el punto de vista personal— que todavía estamos en falta con un cuarto asunto en esta materia: me refiero al ministerio público, tema sobre el cual han existido y seguirán existiendo sin duda alguna divergencias desde el punto de vista doctrinario e, incluso, desde el punto de vista de la interpretación de las disposiciones legales vigentes en cada caso.

A la Comisión de Interior y Justicia del Senado llegó en su oportunidad un pedido de aclaración sobre la posición que ocupaba el ministerio público. Sin entrar a analizar qué era lo que pensábamos desde el punto de vista doctrinario, por una resolución unánime de la comisión en ese momento llegamos a la conclusión de que no era la que a algunos de nosotros nos agradaba y de que, conforme a las disposiciones legales vigentes y a las circunstancias de hecho que existían, estaba dentro de la órbita del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, desde el punto de vista doctrinario, entiendo que es necesario reafirmar las disposiciones legales necesarias para que se encuadre dentro de lo que se llama el sistema judicialista, esto es dentro de la órbita del Poder Judicial. Esta es una cuestión simplemente legal.

La ley vigente es la que, en nuestro país, puede determinar si nos inclinamos por un sistema o por el otro. Y, en realidad, la Comisión de Interior y Justicia de ese momento tuvo en cuenta la ley vigente, que era la que permitía esa conclusión.

Pero repito, señor presidente, que creo que debemos abordar hoy este debate para introducirnos, si así lo considera la mayoría del Congreso —o, al menos, algunos lo vamos a postular—, dentro del sistema justicialista, perdón, judicialista.

Porque en realidad, señor presidente, quiero llevar a la reflexión...

Observo algunas sonrisas...

Sr. Lafferrière. — Proviene de su compañero de bancada, el señor senador por Corrientes (*Risas.*)

Sr. Aguirre Lanari. — Y también provienen de algunos amigos que están en la bancada de enfrente. Pero así vamos a hacer el gran debate. Si nosotros le decimos judicialista y ustedes lo creen justicialista y lo votan favorablemente... (*Risas.*)

En realidad, quiero comentar un simple hecho. Conforme con el artículo 51 de la ley 24.050, los fiscales pueden subrogar a los vocales de las cámaras federales de apelaciones con asiento en las provincias y, entonces, se da un caso que realmente está en contra del artículo 95 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo arrogarse el conocimiento de causas judiciales. Si los miembros del ministerio público están dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, evidentemente no se cumpliría esto en el caso de la subrogación, lo que muestra la necesidad de que en su momento afrontemos tal circunstancia.

Quiero hacer dos últimas consideraciones. En primer lugar, y para que no nos falle la atención en el momento de la discusión en particular, solicito a la Secretaría que se tenga en cuenta que en el ejemplar impreso que tenemos a la vista el artículo siguiente al 87 está calificado erróneamente como 83, cuando en realidad se trata del artículo 88. Además, está mal puesta la frase que viene luego, ya que dice: "Créase una (1) Oficina de Administración...", y debe decir: "Sustitúyese el inciso 3) del artículo 24 de la ley 23.984...". Esta es la primera observación.

La segunda se refiere a algo que va a tener lugar inmediatamente después de que procedamos a la votación del proyecto que tenemos a la vista.

El señor senador por Mendoza, Genoud, nos hizo llegar a la comisión su preocupación y su disconformidad con respecto al tratamiento que se le había dado al proyecto que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados, reduciendo la composición actual —además de otras circunstancias que disminuyen su importancia— a la Cámara Federal de Mendoza. También nos hizo llegar su preocupación el señor senador por San Juan, Posleman, y nosotros estuvimos de acuerdo en la justicia de su observación.

Incluso el señor ministro de Justicia tuvo conocimiento de este reclamo y también participó

de la conveniencia de efectuar una corrección para restituir el asunto a los carriles originarios. Pero nos encontrábamos entonces, como ahora, con que si procedíamos a una rectificación del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, la iniciativa necesariamente debería volver a la Cámara baja para que aceptara o rechazara nuestras modificaciones. Aun en la suposición de que la Cámara de Diputados acepte enmendar su sanción, esta circunstancia es sumamente peligrosa porque nos encontraríamos con que habría pasado la fecha en que tendría que entrar en vigencia el nuevo código.

Por esta razón, solicito a la Honorable Cámara que apruebe en general y en particular el proyecto que tiene a su consideración y luego, en virtud de lo que hemos acordado ayer en la reunión de presidentes de bloque, apruebe el proyecto iniciado por el señor senador Genoud, cuya firma también hemos acompañado señores senadores pertenecientes a otras bancadas.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, pero previamente la Presidencia aclara al señor senador por Corrientes que él debe tener el orden del día primitivo porque el nuevo ya está debidamente corregido en cuanto al artículo en cuestión.

Sr. Aguirre Lanari. — Le agradezco, señor presidente y le entrego mi ejemplar...

Sr. Presidente (Britos). — Para el museo...
(Risas.)

Sr. Brasesco. — Es eficiente el señor presidente; no lo vamos a privatizar.

Sr. Genoud. — Señor presidente: hace un año, en el mes de agosto de 1991, este cuerpo aprobaba el nuevo Código Procesal Penal, que contempla la oralidad. En aquella oportunidad también estuvo presente el señor ministro de Justicia, quien intervino en las deliberaciones que se realizaron con ese objeto.

Hoy, con seguridad, sancionaremos definitivamente el proyecto que establece el sistema, poniendo en funcionamiento el nuevo organigrama judicial federal en materia penal.

Además, señor presidente, hace muy pocos días, en lo que a mi juicio también forma parte de la reforma judicial argentina, votamos la modificación del Reglamento de la Cámara de Senadores, en virtud del cual los acuerdos de los jueces se deben realizar en sesión pública.

Estamos absolutamente de acuerdo, y lo expresamos desde que se inició el debate de este tema, en reformar nuestro sistema judicial, que atraviesa junto con otras instituciones por una crisis de credibilidad pública. Y creo que el paso

que oportunamente dimos consagrando la oralidad como sistema procesal penal fue de fundamental importancia porque hace un año, al reemplazar el Código Procesal Penal que había tenido una existencia ininterrumpida de 103 años, la Argentina se adaptó a la moderna corriente en esta materia que se está implementando en los países más desarrollados del mundo, me refiero al sistema de juzgamiento oral.

En oportunidad de ese largo debate habíamos planteado cómo paradójicamente durante más de un siglo rigió un Código Procesal Penal con normas de contenido represivo, en el marco de un tipo de sistema procesal digno de épocas medievales abandonado en la mayoría de los países del mundo. Y digo paradójicamente porque el Código Penal era 33 años más moderno que el mismo Código Procesal Penal que derogamos.

Estamos absolutamente de acuerdo con la oralidad de los juicios. Sabemos que es más oneroso para el Estado; pero reconocemos que la justicia, al igual que la salud y la seguridad, debe ser prioridad al elaborarse el presupuesto del Estado. Entendemos que todo cuanto se gaste en función de este nuevo sistema judicial realmente constituye una inversión que permitirá poner a la justicia en el nivel que la ciudadanía reclama.

En aquel debate planteamos cuáles eran los elementos positivos de la oralidad, como ha recordado el señor senador Aguirre Lanari. No es el caso —diría yo— de reiterar esos argumentos. Pero debo mencionar algunos.

Presenta la característica de la inmediación, lo que permite que en un mismo acto se reciban la prueba, testimonios, peritajes, etcétera. Allí es donde el tribunal, escucha al ministerio público y a las partes, brindando la absoluta transparencia que da la publicidad del juicio oral. Esto, además de lo que se gana en celeridad desde el momento en que comienza el proceso hasta la sentencia.

Además también señalan los autores como característica importante de la oralidad la identidad física del juzgador. El juez está frente al acusado, al procesado, a los testigos, a los peritos; en fin, a todos los protagonistas del proceso penal.

Por eso sostenemos que se ha avanzado con el nuevo Código Procesal Penal, con la modificación del Reglamento por la cual las sesiones de acuerdo para designar a los jueces son públicas, y con este proyecto de ley que — pese a las ob-

servaciones que vamos a formularle— se concreta un avance significativo en materia de reforma judicial.

Pero no podemos dejar de señalar dos aspectos que merecen nuestra crítica. En primer lugar, merece nuestros reparos que el ministerio público siga dependiendo del Poder Ejecutivo. Siempre ha sido nuestra aspiración —y así lo expusimos en cada oportunidad en que tratamos este tema— que el ministerio público se incorpore al Poder Judicial. Entendemos que en la medida en que los fiscales estén bajo la órbita del Poder Ejecutivo se viola lo establecido en el artículo 95 de la Constitución donde se determina no sólo la división de los poderes sino también la no injerencia del Poder Ejecutivo en el funcionamiento del Poder Judicial. Como vulgarmente se dice, los fiscales no pueden estar a tiro de decreto. El ministerio público debe ser ejercido por un magistrado que cuente con el acuerdo del Senado previa la correspondiente propuesta del Poder Ejecutivo y sólo puede ser removido por las mismas causas que a un juez.

Los fiscales no pueden ser designados y removidos por el Poder Ejecutivo nacional; mucho menos, llegado el caso, sumariados o sancionados, porque todo ello quita independencia al funcionamiento del ministerio público que es el resorte, el motor que impulsa el proceso penal.

Hay muchos proyectos que establecen esta transformación que entendemos es vital para avanzar decididamente hacia la reforma integral de nuestro sistema judicial.

Pero me ha llenado de satisfacción y tranquilidad una conversación que junto con el presidente del bloque he tenido hace unos instantes con el ministro Arslanian —presente en esta sesión—, quien dijo que se estarían ultimando los detalles de redacción de un proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se introducirá esta modificación sustancial en materia penal. Si es así, bienvenido sea. Lo vamos a tratar con prontitud a efectos de coronar de algún modo lo que a nuestro juicio es una demanda generalizada en el país en el ámbito de la Justicia.

Por otra parte, señor presidente, no podemos dejar de señalar la inconveniencia del decreto 1.452, dictado hace pocos días —más concretamente, el 13 de agosto de 1992—, por el cual se dispone poner en funcionamiento antes del 5 de setiembre una determinada cantidad de tribunales, muchos de los cuales están previstos en el proyecto de ley que hoy vamos a sancionar.

Sé que en el Poder Ejecutivo ha existido el temor de que no llegaríamos a sancionar este

proyecto antes del 5 de setiembre, fecha prevista originariamente para poner en funcionamiento la oralidad en todo el país y, concretamente, para la entrada en vigencia plena del nuevo Código Procesal Penal.

Creo que el Poder Ejecutivo ha dado innecesariamente una mala imagen con el dictado de este decreto estando el Congreso abocado al tratamiento del proyecto de ley que va a permitir la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, que fue tratado con rapidez en la Cámara de Diputados, encontrándose ahora en el Senado, donde acogimos con beneplácito este proyecto. Entonces, era lógico que no íbamos a trabar la sanción de esta norma que hoy estamos considerando y seguramente va a contar con el apoyo de todas las bancadas para su aprobación. La prueba de lo que digo está en que este decreto del 13 de agosto de 1992, dentro de unos minutos, cuando sancionemos el proyecto de ley, va a carecer de sentido. En este caso el Poder Ejecutivo se ha curado en salud al poner en vigencia un decreto que en uno de sus artículos dice: "Hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación sancione la implementación de las leyes 23.984 y 24.050, desempeñarán el rol establecido para los jueces de los tribunales mencionados los actuales miembros de las Cámaras Federales de Apelaciones de las jurisdicciones respectivas..."

Quiere decir que ponía en funcionamiento el juicio oral, disponiendo a partir del 5 de setiembre la entrada en vigencia de las jurisdicciones que a continuación se indican: Cámara Nacional de Casación Penal, tribunales orales en todo el país, etcétera.

Entonces, por lo menos tenemos la satisfacción de haber actuado con mucha más celeridad de lo que sospechaba el Poder Ejecutivo para dar al país la posibilidad de la inmediata implementación de la justicia oral en todo su territorio, porque hay objetivos, como es tener una mejor justicia, que no tiene partidismos. No vamos a entrar en la pelea doméstica. No lo haremos en el ámbito parlamentario cuando estamos procurando alcanzar una meta que no es solamente un objetivo de los partidos políticos representados en este cuerpo sino un reclamo del país en su conjunto.

Además, señor presidente, agradezco al señor senador Aguirre Lanari que se haya adelantado a plantear lo que pensaba exponer en mi carácter de senador por Mendoza. En efecto, tengo una observación que formular al artículo 16 que la dejo planteada como tal en función de que inmediatamente después de aprobado el proyecto en

consideración se va a tratar sobre tablas otra iniciativa por la cual se subsana mi planteo, y que se refiere a que el proyecto del Poder Ejecutivo, que creaba nuevos órganos judiciales, fue modificado por la Cámara de Diputados ampliando —yo diría sustancialmente— el número de tribunales a crearse en todo el país. Incluso llega a crear un tribunal penal federal por provincia. Y frente al crecimiento de la infraestructura de justicia criminal del país, paradójicamente, apareció Mendoza reducida en la cantidad de órganos judiciales.

Nos llamó mucho la atención. Tuvimos que revisar todas las estadísticas existentes para darnos cuenta de que no había ninguna justificación para ello. La Cámara Federal de Mendoza comprende un distrito judicial sumamente amplio, que abarca tres provincias —Mendoza, San Juan y San Luis—, con una población de más de 2 millones de habitantes que, además, estadísticamente supera en casos penales al propio distrito judicial de Córdoba.

En 1990 tuvimos en Mendoza 4.260 casos penales y quedaríamos según el proyecto con una infraestructura reducida, compuesta por una Cámara de Apelaciones de tres miembros y un solo tribunal federal oral penal también de tres miembros.

Sin pretender hacer comparaciones odiosas con otros distritos —tampoco hemos tenido tiempo—, en el caso del distrito judicial de Córdoba, que comprende La Rioja y Córdoba, hay una Cámara Federal de seis miembros —o sea, dos salas— y dos tribunales federales penales. Es decir que, comparativamente, había una desventaja en lo que hace al funcionamiento de nuestra justicia federal que traería como consecuencia un funcionamiento irregular e ineficiente por acumulación de causas, entre otras razones. Eso, obviamente, no era deseable frente a la gran cantidad de nuevos organismos que se creaban.

Esta cuestión fue planteada y hubo quejas del Poder Judicial de Mendoza, San Luis y San Juan, que se sumaron inmediatamente para apoyar la legitimidad de este requerimiento.

Se lo comunicamos al señor senador Aguirre Lanari y al señor ministro Arslanian, quien tomó cartas en el asunto y avaló absolutamente nuestra posición.

Otro tanto hizo el señor senador Posleman, por San Juan, y en este momento gran cantidad de diputados, preocupados por el tema, están esperando la aprobación de este proyecto, que seguramente vamos a votar en pocos minutos,

para completar su sanción y quede así integrado el nuevo mapa judicial penal del país con la equidad que reclamamos para todos los estados provinciales. Por eso, señor presidente, en particular hacemos la observación pertinente al artículo 16 y cumpliremos con el compromiso que pactamos con el señor presidente de la Comisión de Interior y Justicia, con la bancada justicialista y con el ministro Arslanian, para que esta ley sea aprobada hoy mismo y se promulgue y publique inmediatamente de modo que el 5 de septiembre se constituya en un hito que marque un avance en lo que significa una mejor justicia para la Nación.

Sr. Presidente (Britos). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Britos). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. *(Aplausos en las bancas y en las galerías.)*

74

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL CON ASIENTO EN MENDOZA

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto de mi autoría junto con la señora senadora Malharro de Torres y los señores senadores Posleman y Aguirre Lanari, cuyo contenido ya ha sido leído por Secretaría y que en parte acabo de fundamentar. De todos modos, una vez que se apruebe el tratamiento sobre tablas lo terminaré de informar en un minuto.

1

CONSTITUCION DE LA CAMARA EN COMISION

Sr. Presidente (Britos). — Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.

Sr. Aguirre Lanari. — Hay dictamen de comisión, hay mayoría. Solicito que por Secretaría se revise esto.

Sr. Presidente (Britos). — Igualmente debe constituirse la Cámara en comisión porque implica gastos.